

# La baja confianza en el gran empresariado chileno: una explicación histórico-institucional\*

Low Confidence in Chile's Big Business Community: a Historical-Institutional Explanation

A baixa confiança no grande empresariado chileno: uma explicação histórico-institucional

Carlos Huneeus Madge\*\* y Alejandro Osorio Rauld\*\*\*

## RESUMEN

El presente artículo teoriza sobre la baja confianza ciudadana en el gran empresariado chileno, en el contexto de la contradicción entre buenos resultados económicos y el debilitamiento del desarrollo político del país. Esta desconfianza en el gran empresariado se enmarcaría dentro de una baja confianza hacia las instituciones y las élites políticas, acentuada por déficits de legitimidad del sistema económico que fue impuesto por la dictadura, y por el hecho de que los gobiernos democráticos no reemplazaron el paradigma económico del neoliberalismo radical por otro, con reformas que eliminaran su radicalidad. El desarrollo de nuestra argumentación se apoya en antecedentes histórico-

Palabras clave: gran empresariado, baja confianza, factores histórico-institucionales, desarrollo político, neoliberalismo.

\* Nuestros agradecimientos a Venus Reyes, asistente de investigación de la Universidad de Santiago, por su soporte técnico para la elaboración de este artículo.

\*\* Chileno. Doctor en Ciencia Política, Universidad de Heidelberg, Alemania. Profesor Titular de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Fue profesor visitante en la Universidad de Siena y la Universidad de Columbia. Durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) se le designó como embajador de Chile en Alemania. Fue director ejecutivo del CERC (Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea), donde desarrolló sondeos de opinión entre 1986 y 2015. Santiago, Chile. chuneeus@derecho.uchile.cl, ORCID: 0000-0002-3278-9208

\*\*\* Chileno. Doctor en Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Profesor ayudante de la Universidad de Alicante, España. Editor de la *Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos*. Miembro del Grupo de investigación Criteri-Socioeconomía, Crítica i Territori, y del Grupo de investigación de Política y Sociedad (UCM-UNED). También es miembro del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina (IUESAL). Alicante, España. alejandro.osorio@ua.es ORCID: 0000-0003-0409-0376

institucionales, datos de las encuestas del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) de Chile y del Latinobarómetro, entrevistas cualitativas a presidentes de las tres principales organizaciones empresariales del país: la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). A modo de conclusión, podemos señalar que el buen desempeño económico después de la dictadura no mejoró la confianza en los grandes empresarios, que atribuimos a los legados del sistema económico anterior y a la decisión de los gobiernos democráticos de enfatizar más la continuidad que su reforma. Esto tiene efectos en la imagen pública de los gremios empresariales, que se proponen solucionarlos con recursos comunicacionales, pero sin conocimientos reales de los factores históricos y estructurales que los explican.

#### **ABSTRACT**

This article theorizes the low level of public confidence in the Chilean business elite in the context of the contradiction between good economic results and the weakening of the country's political development. Distrust of big business is part of a low confidence level in institutions and political elites. The latter is the underline of the depleted legitimacy left by the economic system imposed under a dictatorship, without democratic governments having replaced the radical neoliberal economic paradigm with another, with reforms that eliminated its radicalism. The development of our argument is based on historical-institutional background, data from surveys by the Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) in Chile and Latinobarómetro, and qualitative interviews with the presidents of the three leading organizations of extensive businessmen: Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) and Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). In conclusion, we can point out that the good economic performance after the dictatorship did not improve confidence in big business, which we attribute to the legacies of the dictatorship's financial system and the decision of democratic governments to emphasize continuity rather than reform. This affects the public image of the business associations, which they try to solve with communication resources, ignoring the historical and structural factors that explain it.

**Keywords:**  
big business  
community, low  
citizen confidence,  
historical causes  
and institutional  
factors, political  
development,  
neoliberalism.

## RESUMO

O presente artigo teoriza sobre a baixa confiança da cidadania no grande empresariado chileno, no contexto da contradição entre bons resultados econômicos e o debilitamento do desenvolvimento político do país. Essa desconfiança no grande empresariado se enquadraria em uma baixa confiança nas instituições e nas elites políticas, acentuada por déficits de legitimidade do sistema econômico imposto pela ditadura e pelo fato de que os governos democráticos não substituíram o paradigma econômico de neoliberalismo radical por outro, com reformas que eliminariam seu radicalismo. O desenvolvimento de nossa argumentação se apoia em antecedentes histórico-institucionais, dados das pesquisas do Centro de Estudos da Realidade Contemporânea (CERC) do Chile e do Latinobarômetro, entrevistas qualitativas aos presidentes das três principais organizações empresariais do país: a Sociedade de Fomento Fabril (Sofofa), a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) e a Confederação da Produção e do Comércio (CPC). Como conclusão, podemos indicar que o bom desempenho econômico após a ditadura não aumentou a confiança nos grandes empresários, que atribuímos aos legados do sistema econômico anterior e à decisão dos governos democráticos de enfatizarem mais a sua continuidade do que a reforma. Isso apresenta impactos na imagem pública dos grêmios empresariais, que se propõem a solucioná-los com recursos comunicacionais, mas sem um real conhecimento dos fatores históricos e estruturais que os explicam.

Palavras-chave: grande empresariado, baixa confiança, fatores histórico-institucionais, desenvolvimento político, neoliberalismo.

## Introducción

Hasta poco antes del estallido social de 2019 y la respuesta constitucional que actualmente se encuentra en marcha, la democratización chilena se caracterizó por una contradicción entre, por una parte, muy buenos resultados económicos y las mejores condiciones de vida a la mayoría de los chilenos y, por otra parte, el debilitamiento del desarrollo político con el desplome de los partidos (Luna y Rosenblatt, 2012) y de la participación electoral (Morales, 2020); una baja confianza en las instituciones y las élites dirigentes (CERC, 2019), y un moderado y hasta mediocre apoyo a la democracia, apenas superior al resto de la región en 2018 (Latinobarómetro, 2018). Esta contradicción entre una economía que crecía y un sistema político que, en vez de fortalecerse se debilitó, reemplazó a la contradicción que habría existido en el pasado, según Aníbal Pinto (1958), entre el subdesarrollo económico y “el relativo sobreprogreso en lo político”, con la continuidad de gobiernos elegidos en elecciones competitivas y un sistema de partidos que era la columna vertebral del orden político (Garretón, 1983).

Los indicadores macroeconómicos pueden ser considerados como contundentes. Entre 1990 y 1997, el crecimiento promedio anual fue de 7,7% (disminuyó paulatinamente en los años siguientes); la inflación cayó del 28% en 1989 a un 2-4%; mejoró el empleo y las remuneraciones, y terminó la alta cesantía que caracterizó a toda la década del ochenta. Además, se redujo en forma sustancial la pobreza, del 40% en 1990 al 13,9% en 2009 (Ffrench-Davis, 2018). Esta cifra llegó a menos de dos dígitos en 2017 (según la encuesta CASEN), lo que ilustra un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad chilena, algo que también se condice con los índices de Desarrollo Humano en la región (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2020), también liderados por Chile.

Estos indicadores confirman que hubo un progreso económico y social nunca antes visto en el país y una mejoría de las condiciones de vida de la población, admitidos por los principales organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras instituciones. No obstante, pese a estos avances, desde fines de los años noventa del siglo pasado hasta

poco antes del ciclo de movilización (2011-2020), persistía en la ciudadanía una evaluación crítica del sistema económico y su desempeño (PNUD, 2014). Esto se expresaba (y se sigue expresando) en una percepción negativa sobre la desigualdad (PNUD, 2017); una evaluación crítica de los servicios públicos de salud y educación; el rechazo a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), instituciones privadas sin fines de lucro surgidas de la privatización de 1980 del sistema previsional, por no entregar pensiones dignas; un excesivo poder del gran empresariado sobre otros grupos sociales y políticos (Latinobarómetro, 2020), además de una actitud crítica hacia el rol de los empresarios dominantes en el país (Pérez Ahumada y Andrade, 2021). En un contexto de alta desafección generalizada, estos elementos redundan en una baja confianza hacia el principal agente social del proceso de modernización capitalista en la “nueva democracia” (Montero, 1997), lo que ha ido erosionando la imagen positiva que la dictadura había construido sobre los empresarios, enarbolados como protagonistas de la “reconstrucción nacional” (Campero, 1984).

Sobre la base de literatura especializada, datos estadísticos producidos por distintos centros de estudios de opinión pública y un análisis de entrevistas realizadas a exdirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), las principales organizaciones de los grandes empresarios, el objeto de este artículo es reflexionar críticamente acerca de las razones de la baja confianza ciudadana en el gran empresariado chileno. Este fenómeno tiene que ver con una ciudadanía que desde el retorno de la democracia confía poco en sus instituciones, y guarda relación además con la permanencia de un sistema económico con problemas de legitimación, que atribuimos a causas históricas y a factores institucionales que son legados del régimen militar y de políticas impulsadas por los gobiernos de centroizquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia que controló los cuatro primeros gobiernos.

## Crecimiento económico y desarrollo político

Numerosos estudios han destacado la contribución del crecimiento económico a la consolidación de la democracia, porque, entre otros aportes, favorece la adhesión de la población a este tipo de régimen y

fortalece el anclaje social de sus instituciones, lo que contribuye a su legitimación. Uno de los principales autores de esta postura, Martin Lipset (1960), resumió su tesis en los siguientes términos:

La democracia está relacionada con el estado del desarrollo económico. Mientras más desarrollada sea una nación, mayores serán las posibilidades que sostendrá la democracia. (pp. 59-60)

Esta generalización dio lugar a un controvertido debate y a una amplia bibliografía, con estudios que la confirmaron, refinaron y también la cuestionaron (Diamond, 1992).

En el caso chileno, esta relación positiva entre crecimiento económico y desarrollo político no se confirmaría en los términos planteados por Lipset (1960). Prueba de ello fue la intensidad del estallido social de 2019, que se habría producido, entre otras causas, por la exaltación de un discurso que subrayaba que los buenos indicadores macroeconómicos bastarían para consolidar el orden político y mejorar las condiciones económicas de la mayoría de la población. Esta percepción negativa de los chilenos se puede rastrear en estudios de opinión previos al estallido, los que informaban, por ejemplo, que para el 2017 solo un 17% de la población manifestaba haberse beneficiado de ese progreso, mientras un 76% señalaba que solo había beneficiado a los más ricos (Latinobarómetro, 2017, p. 25). Lo anterior confirma la tesis de Inglehart y Welzel (2005), para quienes desarrollo y crecimiento no son necesariamente lo mismo:

El nivel de desarrollo económico de una sociedad es un factor de predicción mejor de la democratización que su tasa de crecimiento económico. De hecho, las tasas de crecimiento económico son siempre engañosas como factor de predicción de la democracia, e incluso pueden tener el signo contrario. (p. 60)

La reflexión teórica principal de este trabajo es que la baja confianza en los grandes empresarios y la evaluación crítica del sistema económico se explica, no solo por la alta desafección de la ciudadanía hacia el sistema político y sus actores, sino también por el carácter drástico que tuvo la transformación que produjo el “despegue” de la economía chilena, impulsada en dictadura bajo un paradigma de neoliberalismo radical cuestionado en severos términos por la oposición democrática de esos años.

El sistema económico establecido en Chile fue uno de “economía pura de mercado”, según la tipología de Linz y Stepan (1996), con rasgos institucionales que impiden cumplir funciones regulatorias como la defensa de la competencia y de los consumidores. Tampoco proporciona recursos económicos al gobierno de turno para que cumpla funciones de bienestar. Además, por su propio diseño estableció condiciones para que el empresariado pudiera incurrir en prácticas monopólicas y de colusión de precios, con casos que han impactado a la opinión pública, como el de la colusión de farmacias, pollos, papel higiénico y pañales (*confortgate*), entre otros ocurridos en democracia y sin sanciones ejemplificadoras como las que suelen aplicarse en Estados Unidos y los países de la Unión Europea. En contraste, se estimuló una práctica empresarial negativa, caracterizada por el empleo precario, con bajas remuneraciones y prácticas antisindicales que han sido cuestionadas por sectores de la élite y de la población, y que han incidido negativamente en la imagen pública del sector privado y “los que mandan”, al decir de José Luis de Imaz (1977).

Como hemos indicado, el crecimiento económico disminuyó la pobreza y aumentó la riqueza, la que se caracteriza por su concentración en el patrimonio y en el ingreso. Esto ha dado a los empresarios un enorme poder político que han utilizado en democracia para influir en decisiones que les benefician, como es el establecimiento de una agenda económica que se puede calificar como amistosa con sus intereses. Por otra parte, no se establecieron barreras institucionales que aseguraran la autonomía del poder político del poder económico, una de las cuales está constituida por el financiamiento público de los partidos políticos, cuya regulación recién se implementó durante la segunda administración de la presidenta Bachelet (2014-2018). Antes de eso, los candidatos y los partidos de la Concertación buscaron financiamiento público en el Estado a través de prácticas de patronaje y también en las empresas, a las cuales recurrieron los de oposición. Ello fomentó una práctica irregular e ilegal de financiamiento de la política, creando una baja autonomía del poder político frente al poder económico, lo que ha tenido efectos muy nocivos en la actividad gubernamental y legislativa, con escándalos que impactaron a la opinión pública (casos Penta, SQM, empresas pesqueras, entre otras) (Mönckeberg, 2015). El año 2014 tuvo lugar un caso controversial: el financiamiento ilegal de la Sociedad Química y Minera

de Chile (SQM), una empresa emblemática de las privatizaciones de la dictadura, controlada desde entonces por Julio Ponce Lerou, yerno del general Pinochet, que fue una bomba de racimo a la democracia y un golpe al corazón de los partidos de la Concertación. Esta empresa financió a políticos de todos los partidos, con lo cual construyó un “campo minado” para defender sus intereses, con consecuencias electorales inmediatas, porque ninguno de los parlamentarios que recibió aportes de SQM fue elegido en las elecciones parlamentarias del 2017.

El sistema económico heredado de la dictadura no fue reformado por los gobiernos democráticos de centroizquierda, menos aún por los de derecha y centroderecha, pues ambas coaliciones, con distintos énfasis, optaron por su continuidad. Esto se confirmó cuando el Partido Socialista llegó al poder el año 2000 con Ricardo Lagos, el primer presidente de ese partido después de Salvador Allende. Ahí se terminó de consolidar la “economía pura de mercado” a la que Linz y Stepan (1996) hacían mención y a la que veían incompatible con una democracia sólida. Para estos intelectuales, una democracia fuerte requiere una “sociedad económica”; es decir, un sistema económico que proporcione recursos institucionales y materiales para lograr su legitimación.

En síntesis, se puede afirmar que uno de los factores que contribuye a explicar la baja confianza en los empresarios es la raíz histórico-institucional, que no se puede corregir sin reformas institucionales que modifiquen significativamente el sistema económico, y apunten al establecimiento de una “sociedad económica” que logre combinar libertades individuales con mecanismos institucionales de solidaridad social para una mejor redistribución de los recursos.

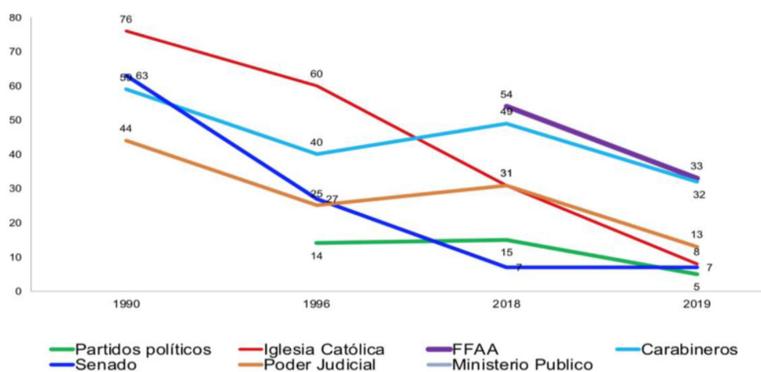
### El debilitamiento del desarrollo político

Los indicadores del debilitamiento del desarrollo político también pueden ser considerados notorios en el caso chileno. Destaca la caída de la participación electoral (Morales, 2020), en relación con la población en edad de votar (PEV), escondida durante dos décadas porque la inscripción electoral era voluntaria y el voto, obligatorio. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 votó un 42% de la PEV –casi siete puntos menos que en la primera vuelta de 2013, en la que votó un 49,4% de la PEV–, que luego aumentó a un 49,4% en la segunda vuelta, explicable por la incertidumbre sobre

el estrecho resultado en la primera vuelta. Finalmente, el presidente electo, Sebastián Piñera, obtuvo un 54,5% que representaba el 26,5% de la PEV. Estas cifras contrastan con las elecciones presidenciales de 1989, las primeras elecciones libres desde las parlamentarias de 1973 (las últimas antes del golpe militar), que se caracterizaron por una altísima participación: 94,72% de los inscritos (un 86,3% de la PEV). En esta se impuso en la primera vuelta Patricio Aylwin, candidato de la Concertación, quien recibió el 55,17% de los votos válidos, que representaban un 46,7% de la PEV.

El debilitamiento del desarrollo político también se manifiesta en la cultura cívica de los chilenos, con la presencia de altos niveles de “cinismo político”, lo que se cristaliza en la creencia de que la mayoría de los políticos está en política solo para beneficiarse individualmente (CERC, 2017). Esto se expresa en la baja confianza en las instituciones representativas (gráfico 1), una mala imagen de la actividad política, un mediocre apoyo a la democracia y una muy baja satisfacción con su desempeño, entre otros aspectos.

Gráfico 1.  
Confianza en las instituciones (1990-2019)



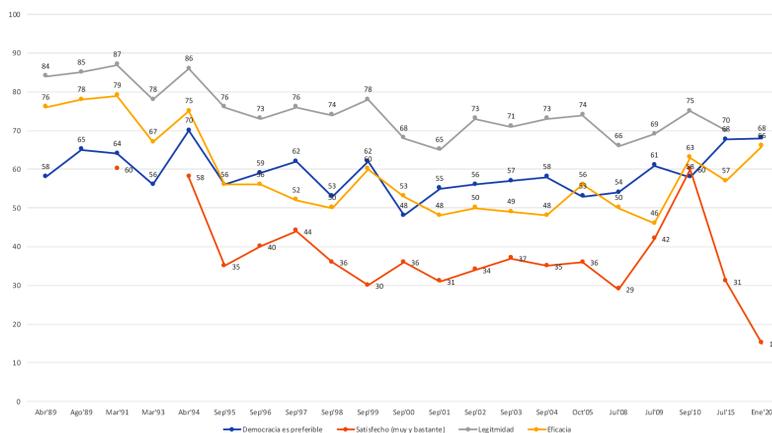
Fuente: *Barómetro de la Política*. CERC (2019).

La eficacia de la democracia, medida a través de la frase “la democracia permite que se solucionen los problemas que tenemos los chilenos”, bajó marcadamente desde la mitad de los años noventa, cuando el crecimiento económico fue muy alto, pero los indicadores subjeti-

vos disminuyeron, como bien se puede apreciar en el gráfico 2 que se expone a continuación, lo que confirma la tesis de Inglehart y Welzel (2005) acerca de la “trampa” del crecimiento económico como predictor de apoyo democrático.

Gráfico 2.

*Apoyo, satisfacción, legitimidad y eficacia de la democracia (1989-2019)*



Fuente: *Barómetros*. CERC (1989-2019).

Otra dimensión del debilitamiento al que hacemos mención son los partidos y su deteriorada imagen en la opinión pública, lo que contrasta con el papel de estas instituciones en la antigua democracia, caracterizado por su fuerte arraigo institucional y su estructura de tres tercios (Sartori, 1976). Lo anterior permitía un sólido vínculo de representación con las bases sociales y una fuerte identificación partidista, de las más altas de la región (Ruiz, 2005; Valenzuela, 1978). Estos elementos hacían del sistema partidista chileno uno no muy distinto a los del viejo continente, sobre todo por el tipo de clivajes que estructuraban la competencia (Lipset y Rokkan, 2001).

En la actualidad, los partidos se han debilitado en las tres dimensiones destacadas por Key (1964): en el electorado, en su organización y en sus capacidades para participar en el gobierno. La caída en el electorado es similar a la que se produjo en las elecciones presidenciales que indicamos anteriormente, y el debilitamiento de su organización se expresa en el desplome de sus militantes, la baja capacidad de re-

novación de sus dirigentes y en la disminución de su implantación territorial, con alicaída presencia en regiones del extremo norte y sur del país. Esto influye en que los partidos posean una menor capacidad para cumplir funciones procedimentales en el gobierno, como entregar orientaciones programáticas y proporcionar profesionales y políticos para ser ministros y altos funcionarios (Mair, 2015). Los partidos de la Concertación no tuvieron programas durante años y sus principales figuras han estado en la política activa desde la transición, incluso desde antes de ella, ya sea en oposición a la dictadura o la participación en ella.

Además, los partidos se han fragmentado, lo que constituye un factor que dificulta la toma de decisiones del gobierno y del congreso, y complejiza la gobernabilidad. De los cinco partidos y medio que inicialmente tuvieron representación parlamentaria en las elecciones de 1989, considerando las rupturas en el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Socialista (PS) en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se llegó a un total de once partidos en la anterior legislatura, también con rupturas en los partidos de derecha. Siete de estos pertenecían a la Nueva Mayoría (NM). En las elecciones de 2017, el número de partidos aumentó todavía más, llegando a dieciocho. Esta fragmentación se produjo a pesar de que el sistema electoral binominal disminuía el número de partidos, pues impuso una competencia electoral en torno a dos grandes bloques, que reproducía los alineamientos del Sí y del No del plebiscito de 1988 en la Concertación-Nueva Mayoría (centroizquierda) y Chile Vamos (centroderecha) (Torcal y Chhibber, 1995).

El funcionamiento deficiente de los partidos ha sido mal evaluado por la ciudadanía en forma persistente. Se trata de las instituciones representativas que entre 1990 y 2019 menos confianza han generado en la población (CERC, 2019). Después del estallido social, y en pleno proceso constituyente, esta situación no ha variado, la valoración negativa incluso se ha acentuado (Centro de Estudios Públicos [CEP], 2021). Esta situación es inédita en la historia de Chile y contrasta con la evaluación de los partidos en la antigua democracia (Navia y Osorio, 2015) y en los tiempos de la dictadura, en los que más de la mitad de la población los consideraba indispensables (Huneus, 1986).

## La mala imagen del empresariado ante la ciudadanía

La desafección política hacia las instituciones representativas también se traslada hacia los grandes empresarios, pues como muestra Latino-barómetro, entre 2001 y 2010 el porcentaje de confianza en promedio de los chilenos hacia las grandes empresas era de un 40%, cifra que disminuyó a un 30% en 2011. A partir del ciclo de movilización que se inicia ese año, la confianza en el gran empresariado comienza a disminuir drásticamente, llegando a poco más del 15% entre 2013 y 2021, según la Encuesta Nacional Bicentenario (2022). Estos datos marcan un contraste con otros países de la región como Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador, en los que desde 2007 la confianza en los empresarios tiende a crecer más que a disminuir; en estas naciones ha sobrepasado el 40% de confianza, lo que se puede considerar una imagen positiva (Latinobarómetro, 2001, 2015).

La baja confianza en el gran empresariado chileno muestra una degradación de la imagen que la dictadura logró construir sobre ellos, en la que se les enarbolaba como protagonistas de la “reconstrucción nacional” (Campero, 1984) y como principales referentes de la modernización del país (Montero, 1997). Esta imagen construida artificialmente los fortaleció ante la ciudadanía y le confirió legitimidad a su intervención en el proceso de democratización que se inicia en 1990 (Álvarez, 2015).

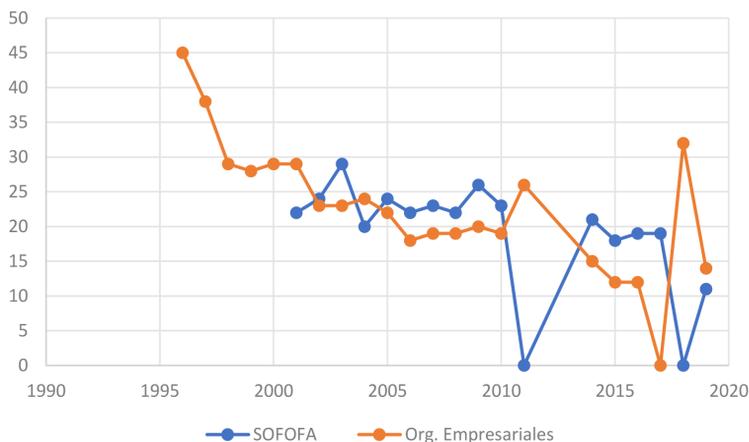
Fue durante la dictadura militar cuando el gran empresariado adquirió los recursos simbólicos, económicos y políticos para constituirse en un agente social relevante de la política chilena, en el nuevo ciclo que se abría con la recuperación de la democracia. Bajo el régimen autoritario se vieron favorecidos con la política de privatización de empresas públicas, por intermedio de lo cual configuraron los cimientos de su actual poder económico (Montero, 1997). Se puede sumar a ello la configuración de frente informal unitario de las organizaciones de los grandes empresarios (SNA, CPC y SOFOFA) para enfrentar de manera cohesionada la transición, con posiciones continuistas, defendiendo la Constitución de 1980 (Torres, 2006) y apoyando el voto Sí en el plebiscito de 1988; es decir, la continuidad del general Pinochet por ocho años más como presidente (Campero y Cortázar, 1988). Este camino de las organizaciones empresariales se apartó de otras transiciones como la ocurrida en España, por ejemplo, un caso con el que se

suele comparar el proceso de transición a la democracia (Alcántara, 1992). En el país europeo, el cambio de régimen encuentra a los empresarios menos organizados, lo que conlleva a la necesidad de crear la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el año 1977, con el objetivo de lograr influir a su favor en la institucionalidad naciente, algo que hicieron de manera menos agresiva que en el caso chileno, subordinándose a las decisiones de los partidos y las Cortes Generales (Cabrera, 1997).

Desde 1990, la élite empresarial chilena ha defendido activamente la “democracia semisoberana” (Huneeus, 2014) instalada por Pinochet y ha elogiado las políticas económicas de los gobiernos de la Concertación, incluso de los presidentes de izquierda, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ambos socialistas. Hasta el estallido social de 2019, se mostró siempre inflexible a reformas que pudiesen afectar la esencia del diseño político y del sistema económico de neoliberalismo radical (Osorio y Reyes, 2021). Su comportamiento en el espacio público ha sido un activo “grupo de presión”, llegando a ocupar incluso puestos en gabinetes y como representantes por el sector político de la derecha (Avendaño y Escudero, 2016), en los dos gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022). Durante el contexto democrático han participado en los canales abiertos por los gobiernos de la Concertación (lobby, asesorías, comisiones, diálogos en la casa de gobierno, etc.) (Álvarez, 2015), y han financiado la actividad política desde las sombras, lo que ha coadyuvado a erosionar el propio trabajo de recuperación de imagen que habían conseguido al terminar el régimen de Pinochet.

Todo lo anterior ha aportado al predominio de una baja confianza en el gran empresariado, que desmiente el discurso elogioso que formulan los dirigentes de sus organizaciones patronales, en el que se resaltan los avances económicos del país y que sitúan a Chile como líder de América Latina. Esto se puede apreciar en la disminución de la confianza en las organizaciones empresariales (gráfico 3).

Gráfico 3 .  
 Confianza en SOFOFA y organizaciones empresariales (1990-2019)



Fuente: *Barómetro de la Política*. CERC (1990-2019).

En la primera oportunidad que se aplicó esta pregunta sobre la confianza en las organizaciones empresariales en el año 1996, alcanzó un 45%, considerada entonces una imagen positiva. Sin embargo, esta se desplomó en forma sostenida en las mediciones siguientes, llegando a un 14% poco antes del 18/O. La SOFOFA, organización de los industriales, y principal instancia entre los gremios empresariales (Arriagada, 2004), también goza de una baja confianza por parte de los chilenos: un 22% en la primera oportunidad que se aplicó la pregunta en el años 2001; alcanzó su mayor porcentaje dos años más tarde, con 29%, para luego fluctuar entre el 20 y el 23%, y alcanzar un 19% en la encuesta de abril de 2016.

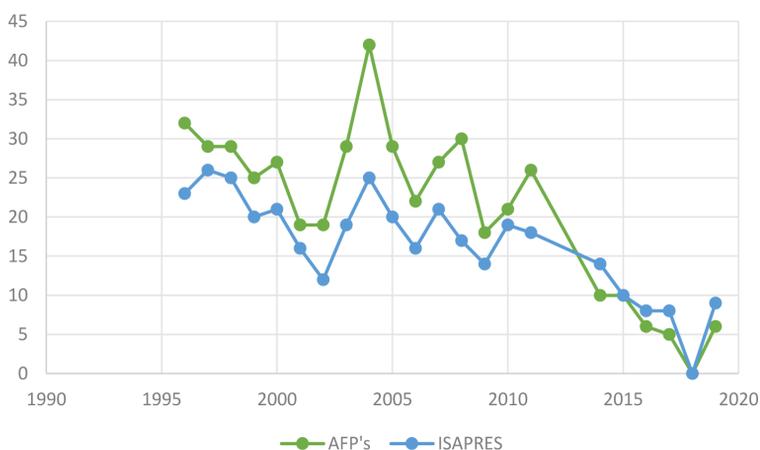
Otro indicador crítico hacia el sector privado es la baja confianza en las instituciones privadas que cumplen funciones públicas, como las Isapres y las AFP, las estrellas de las privatizaciones de la dictadura (gráfico 4). Las AFP han sido seriamente cuestionadas en los últimos años por los movimientos sociales y ciudadanos, pero también han recibido una fuerte defensa por parte de personeros de los gremios empresariales y del sector financiero, pues, como indica en forma entusiasta un destacado exdirigente empresarial de la CPC:

El movimiento No + AFP tiene la misma lógica del movimiento de mayo del 68', diciendo "seamos realistas, pidamos lo imposible"; No + AFP o no más Hidroaysén, o sea, ¿qué quieren, volver a un país del siglo XIX?, ¡es absurdo!

Este tipo de actitudes de la élite empresarial durante gran parte de la última década fueron haciendo eco en la sociedad chilena, lo que se comenzó a reflejar en una opinión pública crítica con los grandes empresarios, fenómeno que, por cierto, no ha ocurrido con las Pymes, altamente valoradas por la ciudadanía durante el ciclo de movilización.

Gráfico 4.

*Confianza en AFP e ISAPRES (1990-2019)*



Fuente: *Barómetro de la Política*. CERC (1990-2019).

En efecto, la baja confianza en el empresariado contrasta significativamente con la valoración positiva que la ciudadanía le otorga a las pequeñas y medianas empresas, que por lo general gozan de la confianza de los chilenos. Según el barómetro de la confianza empresarial realizado por la SOFOFA, la confianza en las PYMES entre 2015 y 2016 se encuentra en promedio sobre el 65%. Al redactar este artículo, durante el proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, las Pymes mantienen una buena imagen en la ciudadanía, como una de las instituciones que mayor confianza genera en los chilenos, con un 55% de apoyo (Pulso Ciudadano, 2022; SOFOFA, 2021).

## La difícil relación entre crecimiento económico y desarrollo democrático

La tesis de Lipset (1960), Inglehart y Welzel (2005) y otros sobre el aporte del crecimiento al desarrollo de la democracia plantea un tema complejo y no resuelto en las ciencias sociales. Como argumentó Diamond (1992) en su momento, la relación entre ambas variables –crecimiento económico y democracia– no es enteramente predictiva ni necesariamente lineal. Puede no ser favorable en ocasiones, y ocurrir retrocesos que dañen la democracia conduciéndola a su colapso, como ocurrió en Alemania en 1933 y en Chile y Uruguay en 1973.

En efecto, el desarrollo económico *per se* no promueve la democracia (Diamond, 1992), ya que tienen que existir otras condiciones que favorezcan el proceso democrático, entre las que destaca la educación (Lipset, 1960), la presencia de organizaciones privadas autónomas (Putnam y Goss, 2003), y que la población tenga valores y actitudes que la favorezcan (Almond y Verba, 1963). Esto significa que debe existir una “cultura cívica” que destaque la tolerancia, la inclusión, la participación y la acomodación, valores que existían en Chile y Uruguay antes de la polarización de fines de los años sesenta (Diamond, 1992, p. 127). Esta cultura cívica democrática también se debe expresar en las élites económicas (Acemoglu y Robinson, 2012), y que ellas la reflejen en sus decisiones a nivel de empresa y en sus relaciones con el poder político.

Desde luego, Lipset (1960) y sus seguidores tuvieron una mirada más bien optimista de la contribución del desarrollo económico a la democracia. No consideraron, como sí lo hizo Niklas Luhmann (1997), que el crecimiento, con el mayor bienestar en los individuos, puede ser una fuente de tensiones y dificultades políticas, porque estimularían nuevas demandas en la población que podrían poner en jaque los bienes obtenidos y llegar a ser una fuente de inestabilidad política. En su célebre investigación *Poliarquía*, Robert Dahl (1971) argumentó que el impacto del desarrollo económico en la democracia no es algo automático y depende del contexto político en que se produce “el despeque” económico, especialmente, de cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento, no solamente en las élites, sino también en el resto de la población. Esto es muy importante porque determina el nivel de desigualdades en el país, lo cual, a su vez, puede dar origen a malestar

y protestas, que dificulten el desarrollo político y conduzcan a reversiones (PNUD, 2004, p. 25).

El mayor crecimiento económico de la población no conduce necesariamente a fortalecer las adhesiones al orden político democrático. También puede tener consecuencias adversas. Esta situación ocurre en el caso chileno y ello se expresa, entre otros elementos, en una ciudadanía que hasta mediciones previas al 18/O evaluaba críticamente el crecimiento económico –por las razones aludidas–, y en un empresario que, del otro lado de la acera, valora positivamente el crecimiento que ha tenido el país, independientemente del descuido de la dimensión distributiva. Esto se puede corroborar en lo que subrayan estos altos dirigentes de la SNA, entrevistados poco antes del estallido social, quienes profesan una “fe ciega” en el mercado:

A lo mejor uno quisiera que las desigualdades se fueran superando más rápido, pero siempre hay que tener cuidado de no introducir elementos que terminen frustrando el modelo que ha sido exitoso.

Yo soy de derecha, no extremista, pero de derecha; libre mercado, el mercado es el que manda.

Lo anterior corrobora la disociación entre lo que piensa la mayoría de los chilenos y lo que piensan los grandes empresarios; fractura que, sin duda, ha contribuido a deprimir todavía más su imagen ante la ciudadanía, que percibe falta de empatía de un grupo social frente al crecimiento económico que parece beneficiar sólo a un sector.

## Factores políticos del crecimiento económico: el contexto institucional

Es necesario considerar el contexto en que se produjo el cambio económico que provocó “el despege” de Chile y las ideas que lo orientaron. Peter A. Hall (1993) ha demostrado la importancia de las ideas en los cambios institucionales. Sostuvo que los *policymaker* trabajan siguiendo un paradigma; es decir, un marco de ideas y estándares que especifica los fines de la política, define el tipo de instrumentos que debieran ser usados para alcanzar esos objetivos e indica la naturaleza misma de los problemas a los cuales se están dirigiendo. Los países, en general, siguen un paradigma en sus políticas económicas que se caracteriza por la coherencia y la flexibilidad para enfrentar nuevos desafíos.

El “despegue” económico de Chile proviene de la política económica de la dictadura, impulsada por los Chicago Boys, que siguió un paradigma de neoliberalismo radical, como reemplazo del paradigma estructuralista que existía desde la gran crisis de 1929. Esa política cambió las instituciones de la antigua democracia y marcó los principales rasgos de la cultura política de los empresarios, que ha perdurado más allá del fin del régimen de Pinochet. Así grafica esta herencia pinochetista un alto dirigente empresarial de la Sociedad Nacional de Agricultura, otra importante patronal en Chile:

El proceso de transición sí que ayudó a terminar de consolidar e instalar las instituciones democráticas del país. Chile es un ejemplo en América Latina y en el mundo del funcionamiento de sus instituciones democráticas, en sus procesos electorarios también, y creo que de alguna manera eso lo dejó diseñado el gobierno militar.

La transformación económica del régimen de Pinochet produjo profundos cambios institucionales, con una brusca apertura comercial, una amplia libertad de mercado y ausencia de normas regulatorias, junto al desmantelamiento del Estado empresario y la privatización de las empresas públicas, con excepción de Codelco y otras empresas. La privatización del sistema de pensiones y la creación de las AFP significó un golpe mortal al Estado benefactor, acompañado por la introducción de mecanismos de mercado en la educación y la salud con un sistema mixto, de salud pública y privada, esta última para las personas de mayores ingresos. Las privatizaciones se hicieron sin establecer un marco legal adecuado para los respectivos órganos regulatorios con la función de defender la competencia y a los consumidores, a fin de evitar monopolios y prácticas empresariales de colusión (Majone, 1994). El establecimiento de regulaciones y de órganos regulatorios antes de las privatizaciones caracterizó los procesos impulsados por los gobiernos conservadores británicos de Margaret Thatcher (1979-1990) y John Major (1990-1997) (Florio, 2004), lo que marca una diferencia sustancial con el caso chileno, caracterizado por la ausencia de estos mecanismos de intervención en el mercado.

El paradigma económico chileno tuvo un concepto de empresa centrado únicamente en el capital, sin considerar al trabajo y a las organizaciones de trabajadores. Los sindicatos fueron debilitados, primero por la represión y después a través de cambios legales; des-

taca el plan Laboral de 1979, que individualizó la relación del trabajador con la empresa, al permitir la pluralidad de organizaciones en la misma compañía (Campero y Valenzuela, 1984). El resultado fue que, cuando se restableció la democracia en 1990, no existían organizaciones sindicales con el poder suficiente para participar del debate público y lograr influir en la agenda del gobierno y el Congreso, como sí ocurría en el país antes de 1973 (Angell, 1972), otras naciones sudamericanas y España. En este último país, producto de una basta cultura sindical fomentada en el franquismo, se logró una verdadera concertación social que ha acostumbrado a los empresarios a interactuar con dirigentes sindicales y gobierno en aras de encontrar acuerdos (Schmitter, 1991). Esa experiencia no se ha dado en Chile; al contrario, se desarrolló una agenda pública proempresarial que dejó en segundo plano a los trabajadores, con menos visibilidad por su debilidad organizativa.

La cosmovisión neoliberal tenía una visión totalizante que abarcaba la economía, la sociedad y el Estado, bajo la primacía de la primera. Consideraba la política subordinada a la economía, particularmente a las reglas del mercado, y concebía al ciudadano como un consumidor que se guía por las apariencias de los productos e intereses materiales (Moulian, 1997), sin preocuparse mayormente por los bienes no materiales. Y en lo político no fue neutral, ya que la tecnocracia de los Chicago Boys tuvo objetivos políticos: contribuir a la legitimidad del orden autoritario, integrar a los empresarios al orden político y debilitar las bases sociales de los partidos de centro e izquierda, en la perspectiva de favorecer a la colectividad de derecha que existiría cuando los militares regresaran a sus cuarteles, para así darle un apoyo político para la continuidad del sistema económico. Una de las principales decisiones en esa dirección fueron las privatizaciones de las empresas estatales del gobierno de Allende –y de aquellas que pasaron a control del gobierno por la crisis del sistema financiero de 1982–; las privatizaciones fueron realizadas de tal manera que sus altos ejecutivos tuvieron el poder de dirigir el cambio de propiedad y beneficiarse de ello, adquiriendo paquetes de acciones que les permitieron controlar su propiedad cuando pasaron al sector privado. Salieron favorecidos también los grupos económicos, que pudieron expandir sus ámbitos de acción (Dahse, 1979; Fazio, 2005).

La modernización económica chilena fue muy distinta a la realizada por otro régimen autoritario que impulsó una transformación económica que condujo al país al desarrollo: la dictadura de Franco en España (1939-1975). El Ministerio de Hacienda estuvo limitado en su poder y la modernización no se enfocó solo en torno a la política económica, sino también en el fortalecimiento de la administración. El centro del gobierno se ubicaba en la presidencia del propio gobierno, gracias a la reforma administrativa de 1957, que creó la Secretaría General Técnica, encargada de llevar adelante la reforma administrativa.

## Continuidad del sistema económico y sus efectos nocivos en la democratización

La democratización implica un cambio institucional profundo que se tiene que expresar en instituciones políticas y también en el sistema económico. Esto fue planteado por Linz y Stepan (1996), quienes destacaron la relevancia de los nuevos sistemas económicos como uno de los cinco ejes de la democratización. Por ello, argumentaron que la nueva democracia requiere de un sistema económico con instituciones que garanticen la propiedad privada, defiendan la libre competencia y la promuevan, proporcionando al mismo tiempo al gobierno de turno los recursos económicos necesarios para atender las necesidades de bienestar de los ciudadanos en educación, salud y previsión. Este sistema económico lo denominaron “sociedad económica”.

Desde luego, las funciones de este sistema económico no se realizan al alero de una planificación centralizada, como la que tuvieron los países con regímenes socialistas, y luego abandonaron cuando colapsó la Unión Soviética y avanzaron a la democracia. Tampoco se pueden alcanzar con una economía de mercado puro, establecida por políticas neoliberales. Estas, afirman Linz y Stepan (1996), no consideran las fallas de los mercados porque han reducido en forma drástica el tamaño del Estado y excluyen sus funciones regulatorias; además, bajo esta economía los gobiernos no cuentan con recursos para financiar las políticas de bienestar, y privilegian la austeridad incluso en situaciones de urgencia social. Para alcanzar una democratización sustantiva se hace necesario reformar los sistemas económicos neoliberales introduciendo cambios significativos en aras de establecer una sociedad económica, en los términos planteados por Linz y Stepan (1996).

Y eso con el objetivo de establecer una congruencia entre el sistema democrático y el sistema económico, para que este último provea los bienes que contribuyen a la legitimidad de la democracia a la que hacíamos mención.

La “sociedad económica” no se dio en el caso chileno en 1990 cuando se restableció la democracia, porque los gobiernos de la Concertación no reformaron el sistema económico heredado de la dictadura. Esto se explica, en gran medida, porque los gobiernos de la Concertación conservaron el paradigma económico del régimen anterior, optaron más por la continuidad que por la reforma de la economía. Ello se realizó bajo el convencimiento de que así se aseguraría que siguiera el dinamismo de la economía cuando se inauguró la democracia. Así, la Concertación buscó ganar legitimidad en la ciudadanía con una economía de mercado pujante, a cambio de la mantención de las reglas del juego institucional. Este fue un requisito de los grandes empresarios para otorgar legitimidad al proceso político y a las iniciativas gubernamentales de democratización económica (Montero, 1993), como fue la reforma tributaria impulsada en el gobierno del presidente Aylwin (1990-1994).

Más aún, el paradigma económico de la dictadura no fue interpelado por la Concertación y hasta sería elogiado por las principales figuras del equipo económico del gobierno de Aylwin, al que le atribuyeron responsabilidad en los buenos resultados económicos alcanzados en democracia. Así expresa positivamente esta continuidad un expresidente de la SOFOFA:

(...) el gobierno de Aylwin fue más político, de transición, pero él logró que las cosas fueran lo suficientemente suaves (...) y había conciencia en el modelo económico, bueno y el “loco” de Foxley, porque creo que terminó bajando los aranceles... pero si era una cuestión impensable ¡era más Chicago Boys que los otros! Porque era el pensamiento económico moderno, era continuidad y en algunas cosas que él estimó que había que profundizar más, las profundizó, en lo laboral hizo reformas para el otro lado.

El primer gobierno del retorno a la democracia, bajo la administración de Patricio Aylwin, orientó la estrategia de consolidación democrática en torno al crecimiento y optó más por la continuidad que por la

reforma del sistema económico establecido en la dictadura. Consideró que, aunque en el corto plazo, la estabilidad democrática dependía de la subordinación de los militares a la autoridad civil y de la actitud del general Pinochet en ello, a mediano y largo plazo la estabilidad del orden político se jugaba en una buena gestión económica, con cinco millones de pobres (el 40% de la población). En adherencia a la tesis de Lipset (1960), el crecimiento produciría *a posteriori* los bienes políticos que permitirían la consolidación de la democracia.

Como la economía crecía en 1989, con una inflación baja en comparación con el contexto latinoamericano, el equipo económico consideró de fundamental importancia lograr la confianza del empresariado, para lo cual era de vital importancia la decisión de dar continuidad al “modelo”. No consideraron sus debilidades y los efectos de estas en el proceso económico y político a largo plazo.

Esta decisión estratégica se adoptó sobre consideraciones económicas, siguiendo argumentos tecnocráticos en el concepto de Caramani (2017); es decir, según argumentos de expertos que creen tener las mejores soluciones para el éxito del gobierno. No consideró que rompiese con la crítica que se formuló a la política económica en dictadura, ni tuvo presente que hay factores políticos que intervienen en la formulación de las políticas económicas, desde el hecho que “los gobiernos son creaturas políticas” (Hall, 1986, p. 274).

Por otro lado, la política económica de los gobiernos democráticos no consideró las principales exigencias políticas del crecimiento, entre las que destaca asegurar la separación de los intereses públicos y privados, especialmente por el carácter del Estado y la economía. El Estado es débil, especialmente en su función regulatoria, y el sistema económico tiene un gran tamaño y diversidad en sus funciones, como encargado de proveer importantes bienes públicos (previsión, salud, educación, etc.), lo que realiza de manera concentrada, y con controladores y altos ejecutivos que han cultivado una cercanía con las autoridades desde antes de 1990, y que previamente apoyaron el régimen de Pinochet. Esa separación significa que el poder político debiera tener autonomía frente al poder económico, con instituciones que lo hicieran posible. Esta es una exigencia que no se plantea en el autoritarismo, porque en este existe una convergencia de los intereses públicos y privados por la centralización decisoria en el dic-

tador. En democracia esa separación es indispensable para asegurar a empresarios y consumidores una igualdad de acceso al mercado e impedir el tráfico de influencia y la corrupción. Esto plantea una amplia agenda de política, que requiere un Estado eficaz para controlar al sector privado en diversos ámbitos (conflictos de interés, uso de información reservada y la puerta giratoria, lobby, etc.). Para conseguirlo, se requiere no solo promulgar leyes y crear instituciones que las apliquen; también es necesaria la voluntad política de las autoridades para hacer efectiva esas leyes.

Es en este contexto que adquiere enorme importancia el financiamiento público de los partidos, indispensable para alcanzar la autonomía del poder político. No haberlo tenido durante un cuarto de siglo empujó a políticos de todos los partidos a recurrir al financiamiento de las empresas. Esto último se tradujo en prácticas ilegales en las cuales incurrieron políticos de todos los partidos (con excepción del Partido Comunista) e importantes empresas y grupos económicos. Se estableció financiamiento público de las campañas electorales en 2003 y para los partidos recién en 2016, como consecuencia de los escándalos que se produjeron en 2014, cuando se tuvo conocimiento de los masivos aportes hechos por el grupo Penta a numerosos candidatos de la Unión Demócrata Independiente (UDI)<sup>1</sup>, y luego los realizados por SQM y Enersis, controlada por la empresa estatal italiana de energía, entre otras, a candidatos de todos los partidos, incluso a la presidencia de la república en 2009 y 2013 (Mönckeberg, 2015). Por primera vez hubo una preocupación por el financiamiento ilegal de la política (y legal de campañas), que mostró la participación de otras empresas y grupos económicos, con acusaciones de corrupción y soborno que llevaron al procesamiento de políticos y altos funcionarios del gobierno anterior. La agenda económica amistosa hacia el sector privado no se puede comprender sin considerar esta falta de barreras que separen el interés público del privado y las malas prácticas de políticos y empresarios, es decir, de controladores y altos ejecutivos.

El descubrimiento de este tipo de prácticas ilícitas por parte de los empresarios terminó por agudizar su mala imagen ante la ciudadanía.

---

1 Partido de derecha fundado por Jaime Guzmán, artífice de la Constitución de 1980 (fundamental para dar continuidad a la dictadura, hasta el día de hoy).

Sin embargo, no es claro que “los que mandan” hayan aprendido la lección, ya que la élite empresarial, poco antes del estallido social, seguía dividida frente al financiamiento público. Mientras algunos persisten en que son las empresas las que tienen que financiar la actividad política, otros valoran positivamente esta regulación. Así manifiestan esta división dos dirigentes de la élite empresarial chilena, el primero perteneciente a la SNA y el segundo a la CPC:

Yo hubiera preferido que se pudiera transparentar que existiera un mecanismo privado para financiar a los partidos políticos. Yo no encuentro apropiado que a través del impuesto de todas las personas se tenga que financiar la actividad política, sobre todo, la chilena, que encuentro que está muy desprestigiada, y que está muy alejada de la realidad de las personas.

Me parece que el financiamiento público es lo que tiene que haber sido, pero no te olvides que este es un proceso histórico. Chile estuvo muchos años prácticamente sin política, entonces, en ese proceso no había tampoco influencia económica por las autoridades, hay como un desconocimiento de muchos años de cómo se financia este cuento, y después ya vino un abuso, de la vuelta a la democracia, y ahí también, es algo absolutamente criticable.

Efectivamente, se trató de una política económica que destacó el papel del gran empresariado como principal agente social, y mantuvo por largos años una visión pasiva de la función regulatoria del Estado, lo que tuvo como consecuencia que importantes empresas desarrollaran malas prácticas económicas y políticas: cometieran abusos contra los consumidores y la libre competencia, coludieron los precios (La Polar, farmacias, pollos, *Confortgate*, etc.), usaron información reservada, establecieron prácticas monopólicas. Todo ello dañó la imagen del sector privado y de los empresarios, tal como vimos en páginas anteriores. El caso de mayor impacto público fue el que involucró a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la principal empresa del grupo Matte, uno de los más poderosos y más antiguos del país, por una colusión de precios de pañales y papel higiénico entre 2001 y 2013, año en que la filial de la empresa en Colombia fue descubierta por el regulador de ese país. El caso se conoció como el *Confortgate*.

## Conclusiones

Hemos argumentado que, hasta el estallido social de 2019, la mala imagen del gran empresariado chileno se produce en el contexto de una democratización caracterizada por la contradicción entre los buenos indicadores objetivos de crecimiento y una evaluación subjetiva crítica del sistema económico y su principal agente social. Esta se explica, entre otros factores, no solo por la instalación de una cultura política de divorcio con las instituciones políticas, sino también por factores históricos-institucionales provenientes de la modernización económica impulsada por la dictadura, de neoliberalismo radical. Se siguió un paradigma que los gobiernos democráticos no reformaron, en el entendido de que con ello asegurarían un alto crecimiento que le daría legitimidad al nuevo orden político.

Corregir ese perfil de opiniones de los chilenos hacia los empresarios requerirá bastante más que campañas de comunicación y discursos de las patronales y organizaciones empresariales, en las que se haga un reconocimiento público de los “errores” cometidos. Requiere considerar las fracturas y debilidades del “modelo” y la necesidad de impulsar cambios institucionales para corregirlos. No haber tomado decisiones al comienzo de la nueva democracia, cuando se optó más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, acentuaría sus fracturas y debilidades, sin corregir los problemas de legitimidad. Este elemento, a nuestro modo de ver, debería ser considerado en la explicación de la intensidad del estallido social de 2019, en el que una de sus consignas fue “no más abusos” por parte de las élites. A modo de ejemplo, el caso de las AFP es elocuente, porque se sabía que no tenían las capacidades para cumplir sus funciones, por sus regulaciones y porque sus controladores privilegiaban sus objetivos económicos de corto plazo. Su diseño institucional fue ajeno a la realidad del sistema económico, con empleo precario, bajos sueldos, inestabilidad laboral y debilidades regulatorias.

El conglomerado progresista de la Concertación no tuvo un paradigma alternativo al de los Chicago Boys, lo cual llevó a darle continuidad al sistema económico. A su vez, hubo continuidad de la mirada tecnocrática de la gestión económica, se ignoraron sus dimensiones políticas, lo que perjudicó a la actividad y a los partidos. No haber dado financiamiento público a estos últimos fue una expresión de esa visión

tecnocrática, con graves consecuencias en la representación política de partidos (*party government*).

La decisión de los principales grupos económicos de controlar la SOFOFA, con la directiva que encabezaba Bernardo Larraín Matte (2017-2021) con un discurso de cambiar “la imagen” de los empresarios, sin enfrentar los problemas institucionales que han conducido a las malas prácticas, da cuenta de cuán difícil será para los capitanes de la industria comprender la profundidad de las causas de los problemas que afectan al sistema económico, que tienen enormes consecuencias en la democracia y la ponen en riesgo de no introducir cambios significativos en materia de igualdad.

La “comunicación” entre los grandes empresarios y la ciudadanía se podrá dar en el contexto de una “sociedad económica” y no en una de mercado puro, en la tipología de Linz y Stepan (1996), en la cual actúan teniendo demasiado poder económico y político, con un Estado débil, escasa autonomía de la política y partidos débiles. Para avanzar a este sistema económico se requiere otro paradigma, en la definición de Hall (1993) que hemos recordado antes, que apunte a cambiar las fracturas y debilidades del actual. Las reformas económicas harán posible una mejor relación entre los actores económicos y la sociedad, tal cual sucede en el caso español, un buen ejemplo a seguir por su concertación social. La nueva Constitución ofrece esta oportunidad, en la medida en que en ella se consagra un Estado Social de Derecho, y se elimina el actual Estado subsidiario, que otorga más fuerza al sector privado, en detrimento del necesario papel del Estado en el sistema económico.

## Referencias

- Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). *Por qué fracasan los países: orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*. Deusto.
- Alcántara, M. (1992). Las transiciones a la democracia en España, América Latina y Europa Oriental. Elementos de una aproximación a un estudio comparativo. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, 11.
- Almond, G. y Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Álvarez, R. (2015). *Los gremios empresariales, política y neoliberalismo*. LOM ediciones.

- Angell, A. (1974). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. Ediciones Era.
- Arriagada, G. (2004). *Los empresarios y la política*. LOM ediciones.
- Avendaño, O. y Escudero, M.C. (2016). Elitismo y poder gremial en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). *Revista CS. Universidad Icesi*, 20, 37-74. <https://doi.org/10.18046/recs.i20.2221>
- Cabrera, M. (1997). La modernización política: Los empresarios en la historia de España. *Papeles de Economía Española*, 73, 1997, 272-284.
- Campero, G. (1984). *Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas*. Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.
- Campero, G. y Cortázar, R. (1988). Actores sociales y la transición a la democracia en Chile. *Colección estudios CIEPLAN*, 25, 115-158.
- Campero, G. y Valenzuela, J.A. (1984). *El movimiento sindical en el régimen militar chileno (1973-1981)*. ILET.
- Caramani, D. (2017). Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of Political Representation and Their Critiques to Party Government. *American Political Science Review*, 1(111), 54-67. <https://doi.org/10.1017/S0003055416000538>
- Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea [CERC]. (2017). *Barómetro de la política*. CERC-MORI. <http://morichile.cl/wp-content/uploads/2017/10/INFORME-DE-PRENSA-BAROMETRO-POL-SET-20171.pdf>
- Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea [CERC]. (2019). *Barómetro de la política*. CERC-MORI. [http://morichile.cl/wp-content/uploads/2019/05/INFORME\\_BAROMETRO\\_DE\\_LAPOLITICA\\_2019.pdf](http://morichile.cl/wp-content/uploads/2019/05/INFORME_BAROMETRO_DE_LAPOLITICA_2019.pdf)
- Centro de Estudios Públicos [CEP]. (2021). *Estudio Nacional de Opinión Pública*, 85. <https://www.cepchile.cl/cep/encuestas-cep/encuestas-2010-2021/estudio-nacional-de-opinion-publica-n-85-septiembre-2021>
- Dahl, R. (1971). *Polyarchy*. Yale University Press.
- Dahse, F. (1979): *El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*. Aconcagua.
- De Imaz, J.L. (1977). *Los que mandan*. Eudeba.

- Diamond, L. (1992). Economic Development and Democracy Reconsidered. *American Behavioral Scientist*, 4/5, 450-499. doi.org/10.1177/000276429203500407
- Encuesta Nacional Bicentenario (2022). *Anhelos y expectativas de la sociedad chilena*. Universidad Católica de Chile.
- Fazio, H. (2005). *Mapa de la extrema riqueza al año 2005*. LOM Ediciones.
- Ffrench-Davis, R. (2018). *Reformas económicas en Chile, 1973-2017*. Taurus.
- Florio, M. (2004). *The Great Divestiture. Evaluating the Welfare Impact of the British Privatization 1979-1997*. The MIT Press.
- Garretón, M.A. (1983). *El proceso político chileno*. FLACSO.
- Hall, P. (1986). *Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France (Europe and the International Order)*. Oxford University Press.
- Hall, P. (1993). Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. *Comparative Politics*, 3(25), 275-296.
- Huneus, C. (1986). *Los chilenos y la política: cambio y continuidad bajo el autoritarismo*. CERC.
- Huneus, C. (2014). *La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet*. Taurus.
- Inglehart, R. y Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence*. Cambridge University Press.
- Key, V.O. (1964). *Politics, Parties and Pressure Groups*. Crowell.
- Latinobarómetro. (2001). *Informe 2001*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Latinobarómetro. (2015). *Informe 2015*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Latinobarómetro. (2017). *Informe 2017*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Latinobarómetro. (2020). *Informe 2020*. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>

- Linz, J.J. y Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Baltimore. The John Hopkins University Press.
- Lipset, S.M. (1960). *Political Man*. Heinemann.
- Lipset, S.M. y Rokkan, S. (2001). Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales. En A. Batlle (Ed.), *Diez textos básicos de ciencia política* (pp. 231-266). Editorial Ariel.
- Luhmann, N. (1997). *Teoría política en el Estado del Bienestar*. Alianza.
- Luna, J.P. y Rosenblatt, F. (2012). ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. En F.J. Díaz y L. Sierra (Eds.), *Democracia con partidos* (pp. 1-115). CEP y CIEPLAN.
- Mair, P. (2015). *Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental*. Alianza Editorial.
- Majone, G. (1994). The Rise of the Regulatory State in Europe. *West European Politics*, 3 (17), 77-101. <https://doi.org/10.1080/01402389408425031>
- Mönckeberg, M.O. (2015). *La máquina para defraudar. Los casos Penta y Soquimich*. Debate.
- Montero, C. (1993). El actor empresarial en transición. *Colección Estudios CIEPLAN*, 37, pp. 37-68.
- Montero, C. (1997). *La revolución empresarial chilena*. CIEPLAN.
- Morales, M. (2020). Estallido social en Chile 2019: participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos. *Revista Análisis Político*, 98(33), 3-25. <https://doi.org/10.15446/anol.v33n98.89407>
- Moulian, T. (1997). *Chile actual: Anatomía de un mito*. ARCIS-LOM Ediciones.
- Navia, P. y Osorio, R. (2015). Las encuestas de opinión pública en Chile antes de 1973. *Latin American Research Review*, 1(50), 117-139. <http://doi.org/10.1353/lar.2015.0009>.
- Osorio Rauld, A. y Reyes, V. (2021). Among Uncertainty, Fear and Reluctance to Change: The Basis of the “Rejection” to the New Constitution in Chile’s Big Business Before the Social Outbreak of 2019. *Journal of Applied Business and Economics*, 6(23), 171-183. <https://articlegateway.com/index.php/JABE/issue/view/416>
- Pinto, A. (1958). *Chile, un caso de desarrollo frustrado*. Editorial Universitaria S.A.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2004). *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos.*
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2014). *Auditoría a la democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo.*
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2017). *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile.*
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2021). *Informe regional de desarrollo humano: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe.*
- Pulso ciudadano (2022). *Enero 2022.* Activa Research. [https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2022/01/Pulso\\_Ciudadano\\_Enero\\_Q2\\_Informe.pdf](https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2022/01/Pulso_Ciudadano_Enero_Q2_Informe.pdf)
- Putnam, R. y Goss, K. (2003). Introducción. En R. Putnam (Ed.), *El declive del capital social. Un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario* (pp. 7-34). Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
- Ruiz, L. (2005). Polarization in the Chilean Party System: Changes and Continuities, 1990-1999. *Institut de Ciències Politiques i Socials*, 236, 1-67.
- Sartori, G. (1976). *Party and Party Systems.* Cambridge University Press.
- Schmitter, P. (1991). La concentración social en perspectiva comparada. En Á. Espina (Ed.), *Concertación social, neocorporatismo y democracia* (pp. 67-80). MTSS.
- SOFOFA. (2021). *Barómetro de la confianza empresarial.* <https://web.sofofa.cl/wp-content/uploads/2019/02/Bar%C3%B3metro-de-la-Confianza-V2.pdf>
- Torcal, M. y Chhibber, P. (1995). Élités, cleavages y sistema de partidos en una democracia consolidada: España (1986-1992). *Reis*, 69/95, 7-38.
- Torres, O. (2006). *La élite empresarial, los Derechos Humanos y el proceso institucionalizador durante el régimen dictatorial 1973-1981* [Tesis de Magíster, Universidad de Chile].
- Valenzuela, A. (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes, Chile.* Johns Hopkins University Press.